

Revista Insurreción

Edición No.396
Octubre/28/2013

SUMARIO



El pasado viernes 18 de octubre, conocimos la noticia de la convalidación que la Corte Constitucional ha hecho de la muerte política de la Senadora Piedad Córdoba, decretada en su contra por el ultraderechista Alejandro Ordoñez que ocupa el cargo de Procurador General de la Nación.

Este señor debería estar en la cárcel al menos por prevaricación y tráfico de influencias. Sabe el país que él ha actuado con métodos de corrupción manipulando la decisión contra Piedad Córdoba. La convalidación de dicha decisión por la corte constitucional, es injusta y equivocada por decir lo menos.

Siendo la paz un propósito nacional por el cual todos estamos obligados a trabajar, a Piedad Córdoba que no ha tomado un arma en su vida, se le castiga y por su compromiso con la paz se le cierran las vías institucionales para la acción política. La sentencia de la Corte avalando la persecución de Ordoñez contra Piedad, muestra la fragilidad de la institucionalidad en su compromiso con los procesos de paz en curso.

Si el presidente Santos tuviese un compromiso serio con la paz, haciendo uso de sus facultades, podría expedir medidas para hacer justicia y rehabilitarla.

Expresamos nuestra solidaridad con la líder política Piedad Córdoba Ruiz y con Colombianas y Colombianos por la Paz. Así mismo a los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Y a los millones de víctimas y dolientes que deben enfrentar a diario, en cárceles y por fuera de ellas, las arbitrariedades más escabrosas de un orden decadente.

Toda la nación la acompaña en esta lucha contra el atropello del Estado. Su voz, su valor y compromiso son un gran aporte en la construcción de los caminos para una Colombia en paz con justicia social.

Por el Comando Central del ELN

Nicolás Rodríguez Bautista

Octubre 28 de 2013





Estimados compatriotas de la Academia Colombiana, señores y señoras de la Comunidad internacional asistentes a este importante evento, amigos y compañeros de camino, todas y todos.

Participamos con ustedes en este recinto, aceptando con mucho gusto y agradecimiento, la convocatoria que se nos ha hecho.

Reiterarles ante todo, nuestra profunda convicción, en cuanto la paz es una obra colectiva y considerarla de otra manera, es equivocado.

Aquí y en diversos encuentros, asistimos amantes de la paz, procedentes de las más diversas expresiones políticas y sociales; esa amplia convocatoria en tales eventos, es la fehaciente demostración de cuanto estimamos y valoramos la paz para Colombia y la paz del mundo; gracias por esa comprensión porque sin ninguna duda, eso nos acerca a la meta por la que muchos trabajamos y damos la vida.

Siendo que esta es otra oportunidad para el intercambio y otras construcciones del camino hacia la paz, porque muchas y muchos ya lo han hecho antes que nosotros, creemos necesario expresar con mucha franqueza, lo que entendemos por la paz en que nos empeñamos, entendiendo que en ello tenemos diferencias y ma-



tices, que es necesario clarificar que los elenos y elenas somos Camilistas y ello nos hace ratificar que las diferencias, lejos de dividirnos y separarnos, debe unirnos, basados en todo lo que nos identifica y tener la capacidad de comprendernos, respetarnos y aceptarnos con agrado, sabiendo que hay asuntos que nos diferencian.

Por todo lo anterior, debo expresarles lo siguiente:

En unos meses el ELN cumplirá 50 años de haberse levantado en armas.

La racionalidad de nuestros análisis nos lleva a concluir que ese levantamiento en armas que nos ha caracterizado como una organización rebelde de revolucionarios, tuvo un basamento de carácter político, con el máximo objetivo de buscar la paz para Colombia.

El sacerdote Camilo Torres dijo en 1965 que en Colombia las vías legales para que el pueblo accediera al poder, estaban serradas y por esa consideración, entre otras, empuñó las armas y dio su vida en combate en aquel luctuoso 15 de febrero de 1966. Doy vivo testimonio de ello porque vi a Camilo llegar a las montañas y desde entonces conviví con él hasta el combate donde dio su vida, convencido de lo que pensaba, buscaba y defendía. Cuanto diera, para que fuera él, quien ofreciera hoy, sustentación de su pensamiento y estoy convencido que si así fuera, aquí y ante ustedes lo repetiría.

Llamo la atención de este cardinal asunto que nos une y diferencia, porque hace solo unos meses, la dirigente del Polo Democrático Alternativo Clara López, le dijo al presidente santos que en Colombia no existían garantías para quienes ejercían el derecho a la oposición política, a raíz de las constantes amenazas contra la vida de los miembros de este partido.

En este mismo sentido y de manera palmaria, esa durísima realidad de carencia de garantías la dicen los miles de muertos, desaparecidos, exiliados y perseguidos políticos y muchos de los millones de desplazados que hoy deambulan en nuestro territorio, sin que ni siquiera muchos de nosotros sintamos como propio su dolor y su amargura de vivir un calvario sin ser responsables de tal desgracia.

Esta realidad que se mantiene 50 años después que Camilo hablara de que las vías legales para acceder al poder estaban serradas, se complementa con un sistema electoral clientelista tramposo y fraudulento controlado desde el poder, que llevó a Camilo a afirmar que "el que escruta elige" lo que es igual a decir que quien cuenta los votos pone los candidatos.

Algunos piensan que todo este entramado de violencia se debe a la existencia y persistencia de la insurgencia porque desde los círculos del poder se ha desplegado una gran campaña publicitaria que ha hecho mella, a quienes así piensan debo preguntarles ¿por qué se vivió esto mismo, antes de 1950 sin que hubiesen guerrillas?

Nosotros hemos afirmado y hoy lo ratificamos que ello es el producto de un Estado Terrorista que recurre a la represión ilegal para truncar las luchas popula-



res. ¿Acaso no fue eso lo que ocurrió con Gaitán y después de su asesinato?

¿En qué circunstancias y quien dio muerte a muchos de los guerrilleros liberales que firmaron "la paz" que les ofrecieron desde el poder? y no solo guerrilleros sino luchadores populares de entonces.

Si la Unión Patriótica surgió fruto de acuerdos entre el gobierno y las FARC, ¿como se explica el cruel y horrendo exterminio a manos de fuerzas ilegales?

Esta difícil realidad histórica la traemos al análisis, no solo por razones históricas sino principalmente, porque hoy el presidente Santos, hace descansar su concepción sobre el logro de la paz, en la desmovilización y desarme de la insurgencia como punto de partida en el proceso de paz, a cambio de espacios para la acción política. Con los anteriores antecedentes que antes de cambiar se mantienen o se han agudizado, ¡que lógica tiene tal punto de vista y que confianza puede tenerse para creer que ahora si la conducta criminal va dejar de actuar?

De esa manera, el inicio del proceso de paz, comienza con un escollo muy grande, porque nadie en la insurgencia concibe que iniciar un proceso de paz, signifique desaparecer o suicidarse.

Expresarlo con toda claridad, es nuestra obligación ante Colombia y ante el mundo.

Señoras y señores, asistimos a una realidad muy compleja en nuestro país, donde los niveles guerreristas, represivos y excluyentes fruto del Terrorismo de Estado, son una verdadera talanquera para avanzar de



manera firme hacia la paz de Colombia.

Si el gobierno nacional, ni siquiera trata con espíritu conciliador y receptivo, las luchas populares, cuyos justos reclamos están consagrados en los derechos constitucionales y esa masa reclamante es reconocida como parte integral de la sociedad y sus organizaciones ¿Qué puede esperarse de las exigencias, críticas y cuestionamientos de una fuerza guerrillera levantada en armas y en rebeldía, que cuestiona el modelo económico y político que se impone en Colombia y sigue reivindicando que son necesarios cambios sustanciales o estructurales de ese modelo?

No es un capricho ni un orgullo, rechazar el marco gubernamental que ofrece la paz como una formula desmovilizadora para la insurgencia, sino que tenemos una visión contrapuesta de lo que es el camino a la paz de Colombia, la cual deseo exponer de manera sucinta:

1- La insurgencia no ha logrado alcanzar su objetivo de lograr, mediante la lucha popular y revolucionaria, que las mayorías organizadas lleguen al poder, por tanto no pretendemos que hoy este asunto se concrete, en unos diálogos con el gobierno nacional; ni más faltaba tamaña ingenuidad.

2- Las oligarquías tampoco han logrado derrotarnos en casi 50 años de confrontación, donde se han usado todos los medios a su alcance, con toda la tecnología militar moderna de Occidente y sobre todo, recurriendo a las perversas prácticas ilegales de exterminio de la población como los escuadrones de la



muerte transformados después en bandas paramilitares que alcanzaron una estructura nacional y sembraron de terror y sangre el territorio entero. Aun así hoy resurge el movimiento de masas y se mantiene con perspectivas de fortalecimiento el movimiento guerrillero, así se diga lo contrario en las voces oficiales.

3- Comprendiendo lo anterior e inspirados en evitar los sufrimientos de la guerra para las mayorías, el ELN, desde 1991 (en el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo) planteó la necesidad de buscar Una salida Política al Conflicto, que hemos entendido como un proceso que a partir de acuerdos entre las partes, se concrete en un cese al fuego y hostilidades, en el que las partes se reconozcan y se comprometan ante el país y la Comunidad internacional, en un plan de largo plazo, para reconstruir el país superando la confrontación armada.

4- Lo anterior indica que le apostamos a un proceso de paz incluyente, donde las partes nos reconozcamos y se inicie un plan donde ellas actúen en consonancia con lo que son y a partir de sus desarrollos, porque no estamos pidiendo más de lo que hemos alcanzado en la lucha misma.

5- En este proceso de Salida Política al Conflicto que planteamos, es decisivo encontrar mecanismos de participación para las comunidades y organizaciones populares y sociales que han sido las marginadas y excluidas de siempre, cuyas agendas, reclamos y pliegos de peticiones alcanzados en sus luchas, han sido negados por los sucesivos gobiernos y allí están como testigo mudo de sus aspiraciones sueños y esperanzas, consagradas muchas de ellas como derechos constitucionales que se niegan y reprimen. Es decir, paz es democracia, es participación, es construcción colectiva y no arreglos por arriba y conciliábulos de espaldas a la sociedad.

6- reafirmamos hoy ante este magno evento que construye acción y pensamiento por el futuro del país, que la carencia en Colombia de una política de Paz de Estado, es un vacío profundo, que lleva a gobiernos y políticos, cuando menos, a improvisar, en un asunto tan delicado como es la superación de esta profunda crisis que solo es posible superarla con el denodado esfuerzo de todos y todas, colocando por encima de intereses de grupo, los de las grandes mayorías. Aun en medio de este complejo panorama, el ELN reitera su disposición de sentarse a dialogar con el gobierno y si esto aún no se ha dado, no es por su falta de voluntad y disposición, porque tenemos lista la delegación para ello desde hace más de un año.

7- Finalmente, respetados señores y señoras deseamos instarlos a contribuir en la constitución del Gran Movimiento Ciudadano por la paz de Colombia, propuesto por diversas organizaciones sociales y populares en sus recientes luchas y movilizaciones, así como por otras expresiones de la sociedad; es necesario unir voluntades, generar una estructura muy amplia donde quepamos todos para lograr la verdadera paz que traiga a esta Colombia valiente, aguerrida y buena, la paz auténtica que es la que signifique justicia y equidad social, democracia y soberanía, trabajemos por ella a partir de lo que nos une y que las diferencias no nos separe ni nos divida; Colombia necesita el concurso activo no solo de los nacionales, sino de todos sus amigos de la comunidad internacional.

Un abrazo a todas y todos, muchas gracias.

Octubre 20 de 2013



Jorge Mario Castro Mejia

Santos, Las Instituciones y las Proximas Elecciones

En Colombia hay un descontento por la incapacidad del Estado de ejecutar políticas sociales y públicas, que desde hace mucho tiempo se han dejado acumular, paliando esporádicamente entre reformas y arreciando la guerra contra el pueblo, hasta llegar a un punto de inflexión o colapso institucional. También hay una falta de interlocución entre el gobierno y sus gobernados, porque los partidos tradicionales no sirven de intermediarios ni representan los intereses de los colombianos.

Hace 25 años el país no vivía una jornada de protestas de la magnitud y la radicalidad que se ha visto últimamente, que se ha convertido en una prueba incontrastable para el Gobierno de turno y que continúa imparable.

El paro agrario y popular ha demostrado que en Colombia está emergiendo un país político distinto al que creen tener bajo su antojo los políticos tradicionales. La primera evidencia de ese nuevo país, es que la política ya no está pasando por el Congreso, ni por el palacio de Nariño, sino que se está haciendo en las calles y regiones; eso va a incidir en las próximas elecciones.

El país minoritario, al elegir a un oligarca como JMS, sabían que en su discurso desde su candidatura estaba cocinando un juego doble que hoy se la están cobrando sus detractores y las mayorías.

Juan Manuel Santos empezó su gobierno lanzando iniciativas contradictorias con lo que de él esperaba, o se temía. Cada vez que se asomaba al balcón de la televisión para anunciar alguna, la calificaba de "histórica", "trascendental" "sin precedentes".

Anunciaba que sería "un traidor de clase", que haría "llorar a los ricos", que devolvería a los campesinos las tierras del despojo y repararía a las víctimas, que buscaría la paz dialogada con la guerrilla. Que le iba a cuidar los "huevitos" a Uribe. Que emprendería las locomotoras para la prosperidad del capital y generaría trabajo.

Apenas se posesionó, la ola invernal dejó inundadas más de 1 millón de hectáreas que acabó con las pocas vías terciarias y secundarias que había, dañó distritos de riego, generó una mortandad bovina y toda la atención se tuvo que enfocar en atender esta emergencia que desde el poder trataba de ocultar sus dimensiones, mientras todas las promesas del recién estrenado presidente se quedaban en la publicidad.

Es notoria la falta de una política de Estado que defina cuál es el modelo de agricultura que necesita el país luego que se haga una profunda reforma agraria, que sea rentable y donde quepan todos: grandes, medianos y en especial los pequeños productores, porque precisamente, por la ausencia de una verdadera agenda agraria, se viene aplicando una política paliativa que acude a los subsidios para apagar incendios que no resuelve la raíz del problema mientras lo agrava con los TLC.

Ha quedado en evidencia en esta jornada nacional de luchas, la incapacidad del gobierno de anticiparse a los problemas y buscar soluciones antes de que estallaran en sus manos. Muchas de las quejas y preocupaciones expresadas en el paro agrario, como costos de fertilizantes, falta de crédito, aumento en importaciones y contrabando, se conocían de tiempo atrás, pero Santos hizo oídos sordos.

Se sigue sentando el precedente en el país , donde las gentes no tiene otro camino que acudir a las vías de hecho, como mecanismo de presión, para que el gobierno atienda los problemas sociales de estudiantes, indígenas, trabajadores de la salud, madres comunitarias campesinos Etc. Así ocurrió con la MANE, con los cafeteros en marzo pasado, con los campesinos del Catatumbo y se repite con los



paperos, cebolleros, y lecheros de Boyacá y otros departamentos.

Los campesinos se aguantaron callados la quiebra que les dejó la apertura económica y un sistema agrario desigual, porque el que asomaba la cabeza a protestar era eliminado, amenazado o desplazado. Las cifras demuestran que el campesinado fue el sector que más sufrió con el exterminio de líderes por el paramilitarismo. Y en ese sentido el paro es una muestra de que algo está cambiando.

El paro indefinido también les sacó a los colombianos un valor refundido: la solidaridad. Especialmente, logró sintonizar a la gente de las ciudades con los campesinos, algo novedoso en un país donde la brecha entre lo urbano y lo rural es tan fuerte. Son gestos simbólicos que ayudan a cohesionar la sociedad y el Nuevo país.

La represión y violencia del ESMAD por orden presidencial deja claro su carácter, en muchos lugares se vio pateando a los manifestantes, disparando y metiéndose en las casas. El paro, nos revela lo difícil que es construir la paz social en nuestro país, pero ese es el reto.

Los repetidos errores y equivocaciones del presidente Santos, al decir que el paro no había sido nacional ni de la magnitud que se esperaba, así como el día en que lanzó el Pacto Nacional Agrario mediante la reunión con el Consejo Gremial Nacional, que representa al sector productivo y empresarial contraponiéndolo a las aspiraciones de los trabajadores agrarios, en especial el campesinado.

Una de las grandes conclusiones que arrojó el paro campesino, que lejos de apagarse, ahora se reaviva, es la necesidad de diseñar una verdadera política agraria y de inversión social de Estado que ayude a superar los problemas estructurales que hay en el campo colombiano.

Los socios políticos más destacados de Santos, los partidos más poderosos de la Unidad Nacional, en el momento más crítico de su gobierno, en lugar de apoyarlo, le dieron la espalda.

En medio de las marchas y de las protestas, el jefe del liberalismo Simón Gaviria no se puso la camiseta para apoyar a Santos ni lo hicieron los ministros liberales. El único que lo hizo fue Aurelio Iragorri, de La U, quien se metió en las negociaciones. Mientras los conservadores pedían sus puestos públicamente, los liberales filtraban sus ambi-




ciones a los medios y se empezó a mover la idea de que si se iba a haber un cambio de ministros, este tenía que favorecer al Partido Liberal, porque era el que lo iba a llevar a la reelección.

Se esperaba que el ex presidente César Gaviria en plena crisis del gobierno Santos, fuera el socio político de más influencia en Palacio y saliera en su defensa, como de hecho lo hizo Germán Vargas Lleras, tal vez el único que salió a apoyarlo. Pero no solo no lo apoyó sino que lo fustigó.

Prueba de que Santos sintió que le dieron la espalda, es la forma como recompuso su gabinete; mandó al carajo a las directivas de los partidos Conservador y Liberal. Sacó dos de los tres ministros conservadores y castigó la gula del liberalismo al combinarlo a un solo ministerio, desde donde le tocará a Simón Gaviria, seguir impulsando el renacer liberal sin la mermelada que esperaban.

Al nombrar a Alfonso Gómez Méndez en la cartera de Justicia, un liberal que Gaviria había condenado al ostracismo, Santos castigó la deslealtad del expresidente César Gaviria. Vamos a ver cuánto dura este gabinete antes de se produzca un nuevo remezón.

Los cambios de ministros que no lograron resolver las necesidades sociales, luego de haber enfatizado las locomotoras y la inversión extranjera, junto a los TLC; llevaron al colapso, al punto de obtener el 72% negativo en las encuestas, es el peor de



los presidentes de los últimos 25 años.

Las investigaciones sobre las elecciones de 2011, realizadas por un calificado grupo de profesionales encabezados por Claudia López, alertaron al país con sus denuncias de la parapolítica; decían que estas personas, de ser elegidas, podrían causar un grave daño a los departamentos por sus antecedentes personales o por los grupos familiares y políticos que los rodeaban. Ni los partidos fueron capaces de retirarles el aval, ni el gobierno ni la opinión pública, pudieron detener su elección.

Las revelaciones de estos días sobre los gobernadores de Sucre, Guerra Tulena; de Magdalena, Miguel Cotes, y del Cesar, Alberto Monsalvo Gnecco, han demostrado la validez de las denuncias, sobre los riesgos de corrupción o de compromiso con las mafias.

Se había llamado la atención sobre Cielo González de Huila, Nelson Mariño de Casanare y Héctor Fabio Useche, gobernadores destituidos. Sobre el gobernador de La Guajira, Kiko Gómez Cerchar, sobre los gobernadores de Santander, Richard Aguilar, y de Arauca, José Facundo Castillo.

El país asombrado fue testigo de la decisión de la Gobernación de Sucre de entregarle una vez más el negocio del chance a una empresa de Enilse López, alias La Gata.

¿Por qué las mafias del contrabando y el narcotráfico están haciendo su agosto en Cesar con la complacencia del gobernador Monsalvo Gnecco, tal como lo denuncia en un documentado artículo de la Silla Vacía? ¿Por qué Kiko Gómez sigue tan campante en La Guajira después de que SEMANA le dedicó una portada y un artículo con graves y sustentadas acusaciones?

El caso del triángulo compuesto por los gobiernos departamentales de La Guajira, Cesar y Magdalena es alarmante. Cada día es más un territorio de la mafia. El país vio con ilusión, que la desmovilización de alias Jorge Cuarenta y de Hernán Giraldo, lo mismo que los juicios a un importante grupo de dirigentes políticos que se aliaron con ellos, sería el comienzo de la reinstitucionalización de la región y de la normalización de la vida democrática en estos territorios. No ha ocurrido así. Otros politiqueros ligados a las mafias han tomado la batuta, otros clanes y grupos mafiosos están controlando el territorio.

Tras las nuevas y reiteradas investigaciones a AUV por paramilitarismo, el surgimiento de grupos paramilitares, a diferencia de lo que han dicho los mismos integrantes de estas estructuras armadas ilegales y algunos analistas, "no obedece a la ausencia del Estado en amplias zonas de la geografía nacional ni se explica por esa causa, por el contrario, nacieron y crecieron allí donde había presencia del Estado y de las Fuerzas Militares y de la mano de éstas".

"El Estado sabía de su existencia y de la vinculación de los altos mandos militares a estos desde 1983 y lo supo durante los largos años de su funcionamiento", asunto que lo llevó a concluir que "el Estado colombiano es responsable, por acción y omisión, de los hechos cometidos por los paramilitares".

Hay 60 congresistas investigados y 22 encarcelados. Paramilitarismo y parapolítica son dos caras de una misma moneda y no pueden avanzar en forma separada. Los congresistas son la cúspide de una estructura de la cual hacen parte alcaldes, diputados, concejales… La Justicia tiene que desmantelar toda esa estructura porque de lo contrario el paramilitarismo seguirá vivo.

La crisis hace parte del saqueo del patrimonio nacional para entregar la riqueza a las multinacionales, del robo y corrupción por las pujas y peleas de la burocracia por el erario público, que debía ser para las obras de inversión social.

Los robos y la corrupción burocrática y estatal crecen como el escándalo de las zonas francas con los hijos de Uribe, Agroingreso seguro, Interbolsa, el carrusel de la contratación de los Nule y el robo de tierras por los empresarios de Brigard & Urrutia, entre otros.

El 97% de la población está de acuerdo en hacer justicia contra la corrupción estatal que afecta la solución de las necesidades de las mayorías.

Por tradición en Colombia la mayoría es antielectoral, abstencionista, no cree que el voto sea la solución a los graves problemas del país, porque es con los mismos, quienes hacen uso de la maquinaria clientelista. La burguesía hace uso de las elecciones para legalizar sus gobiernos con la votación minoritaria. Por eso decimos que estos gobiernos son legales, pero ilegítimos, ello exige nuevos y auténticos dirigentes que den confianza a los electores.

El resultado de esos tres años de incumplimientos le está cayendo ahora encima a Santos de un solo golpe. Lo castigan las encuestas de opinión: nadie, desde que existen, las había tenido tan malas. Lo castiga el que parte de su clase le de la espalda junto a la realidad del descontento, manifestado en paros y protestas.

El ELN hace un llamado a todos los demócratas y patriotas, a mantener la organización, la lucha y movilización, así como a buscar auténticos dirigentes que le den a las elecciones un nuevo sentido que avance en la superación del clientelismo, la corrupción y la continuidad burocrática, que solo lleva a la frustración de las mayorías y permitir interlocutores válidos para emprender el camino de la democracia y la paz.



Discriminacion Laboral y Explotacion Hacia las Mujeres

El Sacerdote y luchador popular Camilo Torres Restrepo en su mensaje dirigido a las mujeres decía "Dentro de la clase popular la mujer tiene muchos deberes de tipo material y casi ningún derecho espiritual. El más alto grado de analfabetismo lo tienen las mujeres de la clase popular. Tienen que trabajar duramente en las ocultas, pero en ocasiones muy duras labores del hogar...." Más adelante refiriéndose a la mujer trabajadora afirmaba que " La mujer de la clase obrera no goza de ninguna protección social y mucho menos legal...".

La realidad de Colombia constata de manera asombrosa esta tendencia estructural a la desigualdad, la discriminación, la mayor explotación, la invisibilización de las mujeres con su correspondiente en la ausencia de justicia y equidad social.

Es tan abrumadora la situación que viven las mujeres que la ONU hace una semana exigió del gobierno nacional una protección especial a sus derechos. Y esta realidad nos llama a actuar para transformar esas situaciones de la sociedad, las cuales indudablemente se han hecho más profundas, desde cuando entro a reinar en el país el capitalismo en su versión neoliberal.

Las Cifras de la Discriminación y la Explotación

Es bueno que nos detengamos en unas cifras que nos ofrece la misma institucionalidad, las cuales son maquilladas para suavizar las situaciones sociales y ocultar la crisis que vivimos; cifras que debemos actualizar y sin embargo sirven de referencias para analizar el desmadre en que está sumida Colombia y que golpea con mucha contundencia a los pobres, mujeres y hombres de esta sociedad.

Del total de la población Colombia había una aproximado de 18 millones de mujeres en edad de trabajar, según cálculos del DANE a finales del año 2011. De ellas, el 46,3% hace parte de la población económicamente activa (PEA) y un 53,7% se consideraba población inactiva.

Ahora bien, del número de mujeres que hacen parte de la PEA y están ocupadas, son un aproximado de 8 millones, sin calificar los términos de la ocupación pues en los criterios que maneja el DANE una persona que haya trabajado un día en la semana o al mes es considerada empleada u ocupada. De estas 7 millones de mujeres ocupadas, unos cuatro millones viven en las 13 áreas metropolitanas del país.



¿Porque es importante este aspecto?, Porque en las ciudades de Colombia lo que predomina es el empleo precarizado e informal, que no tiene ninguna protección social y que perciben ingresos por debajo del mínimo. Encontramos que entonces una mayoría de las mujeres, ocupadas según el DANE lo hacen en una condición de precarización absoluta.

Metiéndose un poco más en las cifras, el porcentaje y número de mujeres que se consideran inactivas son 10 millones. Lo impresionante es que estas mujeres inactivas en su mayoría, un 60 a 65



por ciento, son las que están dedicadas al trabajo reproductivo, o sea las que garantizan el sostenimiento, mantenimiento y reproducción de la fuerza laboral, dedicadas al cuidado de la vida en el hogar y la sociedad. Estas mujeres son trabajadoras, desempeñan una acción muy importante para la sociedad aportando al producto interno de la economía y que en algunos países sobrepasa el 6 por ciento, el gasto aproximado que se come el estamento militar en nuestro país.

El capitalismo lo que ha hecho es invisibilizar este trabajo, por tanto no es tenido en cuenta en los análisis económicos, pues no se ha considerado trabajo históricamente y además, este ha sido naturalizado a la mujer.

El Caso de las Madres Comunitarias

En esta situación se encuentran las trabajadoras comunitarias, las llamadas madres comunitarias, a quienes no se les paga un salario por su trabajo ni las ampara el Código laboral. A ellas se les reconoce en lugar de salarios, una compensación por un servicio. Negar la condición de trabajadoras a las mujeres que realizan trabajo reproductivo equivale a ser discriminadas, abusadas por el Estado, por el capital y negada su existencia como sujetos de derechos humanos y su condición de ciudadanas.

A esta condición de pertenencia al trabajo reproductivo, hacen parte las 77 mil o 79 mil trabajadoras comunitarias (llamadas madres comunitarias) que cumplen ese papel en virtud de una "Ley de protección a la familia" garantizando la atención a más de un millón 700 mil niños y/o niñas.

Es muy ilustrativo el caso de las madres comunitarias, aunque no es el único, pues el rango del trabajo reproductivo es muy amplio, que son declaradas inactivas por el Estado, pues bajo el argumento de que no realizan un trabajo productivo, pierden todas las garantías sociales, políticas y económicas. Es decir, no son sujetas de derechos sociales, ni tienen derecho a la jubilación, a un sistema de salud justo; ni a vacaciones ni otros derechos consagrados en la legislación laboral. En fin, se les niega el derecho al trabajo digno y decente, como está consignado en la carta de los derechos humanos de la ONU y de la OIT.

Grave situación que condena al desamparo social a 10 mil trabajadoras comunitarias que han laborado más de 25 años, lo cual las lleva a ser merecedoras de la pensión. El Estado, a través del bienestar social, les ha negado cualquier posibilidad de obtener el derecho a la jubilación con el objetivo de asegurar una vejez digna y decente. Por el contrario quiere someter a las mujeres trabajadoras mayores de 65 años, a un retiro forzoso y mandarlas a la calle para que se conviertan en "ancianas indigentes". Y esto se hace contrariando una sentencia de la corte Constitucional, que llamó a superar el estado de inconstitucionalidad e irregularidad laboral y por tanto llama a formalizar las relaciones laborales de las trabajadoras comunitarias.

Mientras que en otros países como Argentina, se promueven legislaciones donde queda establecido el carácter de trabajo reconociéndolo como trabajo doméstico y reproductivo (reproducción de la fuerza de trabajo y de la sociedad) en nuestro país se desconoce este derecho.

Por ello es fácil entender, que el encabezamiento del pliego nacional de peticiones de estas trabajadoras comunitarias, que motivó su protesta nacional que duro más de una semana, tomándose las instituciones estatales de bienestar familiar, comienza diciendo que presentan el petitorio "en nuestra condición de mujeres, ciudadanas colombianas y de trabajadoras vinculadas a los Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar". Porque exigen también que les sean reconocidos los derechos a la salud, la participación en las decisiones de las políticas públicas que les atañen, el derecho de ser trabajadoras, a la organización sindical y otros derechos humanos y laborales.

Nuestro Mártir y precursor de la teología de la liberación en su mensaje a las mujeres llama a que las mujeres por su doble condición de explotadas están llamadas a seguir siendo doblemente revolucionarias como está sucediendo, llenando las calles y plazas de Colombia, de ideales de dignidad, justicia y equidad social.





ITALIA: La Migracion y las Lagrimas de Cocodrilo



Jueves 3 de septiembre 2013; 3 y 30 de la madrugada: un barco con 518 migrantes se hunde cerca de las costas de la Isla de Lampedusa, en el extremo sur de Italia.

Mueren 363 migrantes. 363 hombres, niñ@s y mujeres ahora sin nombres, sin identidad, ya no más identificables; 363 familias desconocidas y regadas en algún lugar del norte de África que ahora ni siquiera saben si pueden o tienen que llorar por algún familiar que intentaba asaltar el fortín europeo y que ahora descansan en la inmensa fosa común del mar Mediterráneo.

La paradoja es que sin saberlo, tal vez ni quererlo, "gracias al profundo sentimiento humanitario del Gobierno italiano" y a su moderno cementerio trasero, los 363 migrantes muertos se volvieron italianos; europeos, ya no más clandestinos, sino potencialmente ciudadanos desarrollados en la democrática y progresista Europa.

Italianos, pero muertos

Los demás, los sobrevivientes ¡NO! Para ellos que tuvieron la mala suerte de no morirse quemados vivos en los llamados "barcos de la esperanza" o ahogados en el mar Mediterráneo frente a la costa italiana, bajo la mirada severa e hipócrita de los gendarmes italianos, los espera la cárcel; los calabozos de los llamados CIE – Centros de Identificación y Expulsión – o el inicio interminable de una nueva existencia clandestina; sobreviviendo de limosnas o de algún ocasional trabajito súper explotado pero que jamás les dará derechos algunos...

Nunca como esta vez el gobierno italiano ha sido tan puntual y consecuente con sus planes estratégicos.

Mientras las noticias de la nueva tragedia a escasos 800 metros de las costas de la sureña isla italiana de Lampedusa, rondaban por el mundo, el Gobierno italiano entregaba 226 millones de Euros al Ministerio de Defensa solo para los últimos tres meses de este año de financiación de las llamadas "Misiones internacionales de Paz" (léase agresiones neocolonialistas).

A causa de los graves acontecimientos, los ministros de guerra que se aprestaban a la firma de los acuerdos, respetaron hasta el minuto de "duelo nacional".

Poco importa si en lugar de sacar del delgado presupuesto nacional, mínimas financiaciones para obras y emergencias sociales – como por ejemplo en este caso barcos, aparados y personal entrenado al socorro –, el lobby armamentista y los intereses de la casta militar siguen robando al pueblo italiano, casi 21 mil millones de euros anuales.

Ningún escándalo entonces si la actitud de los militares – a pesar de ser muy numerosos y bien instrumentados en las aguas del



entorno de Lampedusa – sea extremamente racista, visto que los ciudadanos y los pescadores isleños – que a riesgo de ser sindicados por favorecer la inmigración clandestina, se han movilizado para auxiliar los náufragos – denunciaron una maquinaria de socorro demasiado y voluntariamente lenta e indiferente a la tragedia que se estaba dando.

De otra forma, este aparato bélico, tendría que asumir que su tecnología de guerra utilizada para la interceptación de los ejércitos de los miserables asaltantes al fortín, no sirve para nada, visto que tampoco se enteraron de un barco envuelto en llamas en horas de la madrugada a unos 800 metros de sus torres, de sus radares, de sus cohetes y drones...

Pues, de las dos... ¡las dos! Porque la casta militar además de ser racista, sigue siendo esclava y consecuente a la lógica imperial que tiene que defender, además de sus propios privilegios, el orden del mercado y de las grandes agencias financieras. Y para mantener este rumbo, sigue condicionando los alternos gobiernos títeres con gastos estratosféricos para agresiones militares que hasta la misma constitución italiana rechaza rotundamente.

Sin entrar en el fondo de los gastos militares en Italia, es suficiente constatar la adquisición de parte del Gobierno Italiano para los próximos años, de 90 aviones de combate F 35 con un gasto de 14 mil millones de Euros.

14 mil millones que reducen de forma radical los gastos sociales como salud, vivienda, inversiones y política de desarrollo.

Como si eso fuera poco, el sector militar tiene que mantener hasta el fondo el papel de perro de guardia de sus patrones. Solo para quedarse en el tema del intento ítalo-europeo de parar la "invasión de los pobres", es clave saber que solo en Italia se gastan más de 200 millones de Euros anuales para el mantenimiento de los CIE (Centros de Identificación y Expulsión), campos de concentración legalizados donde, gracias a los criminales acuerdos de Schengen del 1995, el migrante que entra pierde completamente los derechos fundamentales y su reclusión está exclusivamente finalizada a la garantía de su expulsión del país, y por ende, de todos los países europeos.

Esa, en gran medida, hubiera sido la etapa "clásica" también para la mayoría de los 518 migrantes que esperaban pisar el terreno del jardín del viejo continente, con la íntima esperanza de zafarse pronto del trato inhumano e injusto del CIE de Lampedusa. Lugar con Estatus de excepción sin derecho a reclamar asilo político, sin la posibilidad de recibir visitas de familiares o abogados – peor aún de las cárceles comunes – y tampoco asistencia médica,



pero con entregas masiva de psicofármacos para "calmar" los ánimos de los más recalcitrantes dispuestos a revueltas y/o protestas internas.

En este sentido Italia fue uno de los países más beneficiado por "Frontex", la agencia del Consejo Europeo para el monitoreo de las costas, con financiaciones de 230 millones de euros entre el 2010 y 2012 y otros 137 millones para el 2013. Plata que lejos de ser invertida para operaciones de rescate humanitario de migrantes en el Mediterráneo, retro alimenta un sistema de control militar y represivo que a lo largo de estos últimos 20 años, además, ya causó poco menos de 20.000 muertos.

Pero Italia, su clase dominante, tiene también algo mas con que "vanagloriarse": bajo un profundo sentimiento racista en el 2002 se decretó la famosa "Ley contra la inmigración clandestina", más conocida como la "Bossi-Fini". El primer, jefe de la "Liga Norte", los separatistas que pelean por la independencia del Norte del resto de Italia; y el segundo, "hijo legítimo" del fascismo italiano.

Sin embargo, a pesar de que los dos politiqueros, con sus respectivos grupos parlamentarios, cayeron en ruina, tenemos que tener en cuenta que esa ley, no obstante la firme oposición de masas, mantiene aún su arquitectura política y su estrategia de terror, siendo la punta avanzada de la represión del derecho sagrado a la libertad de movimiento del ser humano.

Esta ley, nunca rechazada ni siquiera por los progresistas post-comunistas, permite el derecho de arresto de los migrantes "clandestinos" con expulsión a la frontera; rechazo del visado sin motivaciones; registro obligatorio de huellas; cárcel para el migrante clandestino que regrese a Italia luego de su expulsión; detención en un CIE para el migrante indocumentado; utilización de buques militares para el "contraste" a la migración; judicialización de los que auxilian los migrantes en el mar, por favorecimiento de la inmigración clandestina; permiso de estadía otorgado solo para 2 años pero condicionado a un trabajo efectivo antes de la llegada al país (?!).

¿Y Qué decir de ciertos amigos de las causas de la liberación de los pueblos... Como comentar el papel de Gaddafi, en el contexto de los criminales acuerdos entre Italia y Libia para rechazar los migrantes norte-africanos? ¿Acuerdos avalados por el 90% de las fuerzas políticas italianas en los últimos gobiernos y de la misma Unión Europea?

Acuerdos de centenares de millones de euros cada años con que se otorgaban derechos violatorios a la vida de miles de migrantes africanos recluidos, torturados, violados y asesinados, utilizados como forma de presión a nivel internacional para el cese del embargo contra Libia o exigiendo mayores inversiones financieras en el país.

Pues, ahora que la "democracia" ha sido importada en Libia también con cañones, muerte y otros escenarios de guerra neocolonialista, ensangrientan el norte de África y en el Oriente Medio, la invasión de los miserables no se puede ocultar ni revertir precisamente porque Italia como Francia, Inglaterra, Alemania y Europa toda, son los países que brindaron, organizaron y fomentaron las agresiones en estas regiones.

Lo saben los ciudadanos de la isla de Lampedusa; conocen la hipócrita conmoción y las fintas lágrimas de los politiqueros italianos cuando los reciben con pancartas "¡NO ACEPTAMOS VISITAS!" La propuesta del gobierno italiano de promover Lampedusa al Nobel por la Paz además de ser demagógica, queda un insulto a la resistencia de los italianos mejores contra la guerra, el colonialismo y la supuesta exportación de la democracia.

Los isleños responden: "¡A LAMPEDUSA EL NOBEL, EL DINERO A LA GUERRA EN AFGANISTÁN!"

No existe el delito de migración. Hay que reconocer y luchar para el derecho de todos pueblos a la movilización, la migración, la autodeterminación y la libertad.


LN